

comercio que gira en Mérida, bajo la razón social "F. Diego y Compañía," contra el Tesorero municipal del puerto del Progreso, que le cobra doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos eatorce cerdos que esa casa exportó para la Habana en el vapor español "Don Quijote;" y

Considerando: Que ese cobro se hace en virtud de una disposición relativa á ley de arbitrios municipales.

Que los Estados no pueden imponer contribuciones sobre la exportación sin consentimiento del Congreso general; y que por lo mismo, ese cobro importa la infracción del artículo 112 y la violación de la garantía á que se refiere el 16 de la Constitución general.

De conformidad con lo que disponen las fracciones 1ª y 3ª de su artículo 101, se decreta:

Que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 6 de Agosto último, por el Juzgado de Distrito de Yucatán, que decia:

Que la Justicia de la Unión ampara y protege á la casa de "F. Diego y Compañía," contra los actos del Tesorero municipal del Progreso, que le cobra doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos doce cerdos embarcados para la Habana.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramírez.*—*L. M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 20 de 1874.—*H. Landá,* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, por los CC. Diego Guerrero y socios, contra los actos de los CC. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro y Gefe político de la Capital del Estado, por la prisión arbitraria impuesta á unos y la orden de aprehensión dictada contra los demás.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que con fecha 2 del presente mes, los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landín y Antonio Gonzalez, solicitaron el amparo de la Justicia Federal contra los actos del C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro, que sin mandamiento que funde y motive la causa legal del procedimiento, ha ordenado su prisión, violando el artículo 16 de la Carta fundamental de la República, cuyo artículo 19 también se dice infringido respecto de Guillermo Ruiz de Esparza y Cecilio Hernandez, castigados por irrespetuosos, en uso de la facultad consignada en el artículo 67 del Reglamento económico-político de los partidos del Estado.

Negada la suspensión provisional del primero de los actos reclamados y rendido el informe de la autoridad inmediatamente encargada de ejecutarlos, resulta: que la orden de aprehender á los quejosos, con excepción de Antonio Gonzalez, fué determinada, por saberse que aquellos formaron parte de la reunión en que se profirieron insultos contra las autoridades del Estado, la noche del 26 de Julio último, cuya orden se ejecutó en Hernandez y Ruiz de Esparza, á quienes el C. Presidente municipal impuso una multa de cincuenta pesos, 6 en su defecto un mes de prisión, calificando de irrespetuoso el hecho de haber remitido directamente á

la Gefatura política, los expedientes de las secciones electorales que presidieron.

Sin tomar en cuenta la circunstancia particular de estar recomendada la aprehension de García y Rosales por la Gefatura política del partido de Ojocaliente, segun consta del oficio que obra á fojas 7, por ser este de fecha posterior á la en que tuvieron lugar los hechos que motivan la presente queja, debe notarse que los presidentes de las secciones electorales I, II, IV y V del municipio de San José de la Isla y Castro, con absoluta libertad recogieron la votacion y terminaron los expedientes relativos, puesto que la Orden de aprehension fué expedida tres dias despues, sin que por lo mismo con exactitud pueda decirse que se les pusiera obstáculo en el ejercicio de las prerogativas consignadas en las fracciones 1ª y 2ª del artículo 35 de la Constitucion federal, mientras que siendo atribuciones de los Presidentes municipales hacer guardar el orden público consignando los presuntos reos á la autoridad competente para juzgarlos, como aparece de los documentos que por justificacion acompaña á su informe el Presidente municipal la facultad legal con que procedió y el hecho que dió origen al ejercicio de ella, puede concluirse que no existe la infraccion que motiva el recurso respecto de las personas que suscriben en nombre propio el escrito del dia 2 del presente mes.

En cuanto á las pretensiones formalizadas por Guillermo Ruiz de Esparza y Cecilio Hernandez, puesto que conforme al artículo 21 de la citada Constitucion, la autoridad política ó administrativa, como correccion puede imponer hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusion en los casos y modo que espresamente determina la ley, habiendo obrado el Presidente de San José de la Isla en la esfera de la facultad consignada en el artículo 67 del Reglamento económico-político, tampoco parece haber mérito para estimar violada la garantía de que habla el artículo 19 de la misma Carta fundamental de la República.

Quizá los quejosos no formaron parte de la reunion que el 26 de Julio último pretendiera turbar la tranquilidad pública en San José de la Isla; quizá tampoco su conducta importe un acto de irrespetuosidad á la primera autoridad política del municipio; pero sobre ambos hechos no aparece prueba alguna que obre contra los justificantes del informe de la autoridad responsable; por esto, y con fundamento de los preceptos constitucionales á que se ha hecho referencia, el Fiscal pide:

Que se declare no haber lugar al amparo que los solicitantes reclaman contra la Orden de aprehension y la pena correccional acordadas por el C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro, por no haber infraccion de las garantías consignadas en los artículos 16 y 19 de la Constitucion federal.

Zacatecas, Agosto 13 de 1874.—*Eduardo G. Pankhurst.*

Es copia, sacada en cumplimiento de la fraccion 2ª del artículo 2º de la ley de 8 de Diciembre de 1870.—*E. G. Pankhurst.*

#### *Segundo Pedimento del C. Promotor.*

C. Juez.

El Promotor, conforme al artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, pasa á alegar en la queja que por la violacion de los artículos 16 y 19 de la Carta fundamental de la República, formalizaron Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landín, Antonio Gonzalez, Guillermo R. de Esparza y Cecilio Hernandez, contra el C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro que ordenó su aprehension, y conseguida la de los dos últimos les impuso una multa de cincuenta pesos ó un mes de prision.

Para fundar el recurso se afirma que la autoridad sin causa legal ordenó la aprehension de todos, teniendo Hernandez y Ruiz de Esparza mas de tres dias de detenidos

sin que se haya pronunciado en su contra auto de formal prision.

La autoridad ejecutora de los actos reclamados, á su vez asegura, que alterado el orden público en la noche del día 26 de Julio último, se vió en el caso de dictar las disposiciones necesarias para restablecerlo y castigar á los perturbadores, en cuyo número dice se encuentran los quejosos, á dos de los que impuso una correccion, usando de las facultades que le concede el decreto de 5 de Mayo de 1852.

Aunque Diego Guerrero y socios indicaron en el ocurso de 2 del presente mes que podia justificarse no haber habido otro motivo para proceder en su contra que el despecho de la autoridad municipal, por el resultado contrario á las candidaturas oficiales para funcionarios del Estado en las secciones electorales de que formaron parte, ninguna prueba rindieron á este respecto, mientras que al informe con justificacion se acompañaron las copias de varias comunicaciones relativas al hecho que dió origen al ejercicio de la facultad legal con que se ordenó su aprehension.

El Reglamento económico-político de los partidos, faculta en su artículo 68 á los Presidentes de las Asambleas municipales, para decretar y ejecutar en su distrito la aprehension de alguna ó mas personas, si así lo exige la seguridad pública, pudiendo además conforme al artículo 67 imponer correccionalmente y sin figura de juicio hasta un mes de obras públicas ó de arresto, segun las circunstancias; por manera, que atendiendo solo á los datos del expediente resulta, que el C. Presidente municipal de San José de la Isla con motivo y fundamento ordenó la prision de los quejosos, y respecto de los aprehendidos, con facultades legales les impuso un castigo correccional, dentro de los límites marcados en el artículo 21 de la Constitucion.

Por esto y reproduciendo el pedimento de 13 del corriente, el que suscribe concluye solicitando se declare: que la Justicia de la

Union no ampara á Diego Guerrero y socios contra la orden de aprehension y la pena correccional acordadas por el C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro, por no infringirse las garantías consignadas en los artículos 16 y 19 de la Constitucion federal.

Zacatecas, Agosto 21 de 1874.—*Eduardo G. Pankhurst.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Zacatecas, Agosto 25 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landin, Cirilo Hernandez y Guillermo Ruiz de Esparza, contra los actos de los CC. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro, y Gefe político de la Capital, por la prision de un mes impuesta á los dos últimos y la orden de aprehension dictada contra los demás; considerando los quejosos emanadas todas estas providencias, por el resultado de las elecciones del 26 de Julio último, y vulneradas las garantías que protegen los arts. 16, 19 y 35 en sus fracciones 1ª y 2ª de la Constitucion general. Visto el auto en que se declaró no haber lugar á la suspension provisional; los informes justificados del C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro; los pedimentos y alegato del C. Promotor fiscal, y la citacion para sentencia.

Considerando 1º: Que segun lo que resulta de autos, los quejosos procedieron con toda libertad y sin coaccion de la autoridad, en sus actos electorales.

2º: Que los CC. Cecilio Hernandez y Guillermo Ruiz de Esparza, fueron reducidos á prision por irrespetuosidad, pena que les impuso el C. Presidente citado, por no haber pagado la multa de cincuenta pesos, que les impuso por la misma falta, conforme á las facultades que le concede el Reglamento Económico político de los Parti-

dos, de cinco de Mayo de 1852, en su art. 67 ley vigente en el Estado y que no pugna con la Constitucion federal.

3º: Que el Juzgado no puede hacer calificación ni declaración sobre las actos reclamados.

4º: Que la Orden de prision expedida contra los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo y Cruz Landin, tuvo por motivo el motin que se dice hicieron los expresados, para consignarlos á la autoridad competente.

5º: Que ciertos 6 no los hechos culpables, aparece que el C. Presidente dió aviso al C. Gefe político de la Capital y se dictó la aprehension y consignacion al Juez competente.

6º: Que la detencion no puede considerarse como una pena, cuando se ejecuta para hacer la consignacion de los acusados y averiguar los delitos cometidos, como lo determina el art. 60 del Código penal del Distrito, vigente en el Estado.

7º: Que todas las disposiciones y actos del C. Presidente de San José de la Isla y Castro, se encuentran dentro de las facultades que le señalan los arts. 50, 67, 68 y 70 del citado Reglamento Económico Político.

Que de las consideraciones anteriores resulta, que no se han vulnerado en las personas de los quejosos las garantías que protegen los artículos de la Constitucion general en que funda sus ocursos, conforme á lo dispuesto en la ley de 29 de Enero de 1859, y lo pedido por el C. Promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara: 1º: que la Justicia de la Union no protegè ni ampara á los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landin, Cirilo Hernandez y Guillermo Ruiz de Esparza, contra los actos del Presidente de la Municipalidad de San José de la Isla y Castro, y Gefe político de la Capital, imponiendo á los dos últimos un mes de prision á obras públicas por irrespetuosos, y ordenando la aprehen-

sion de los demas por el delito de motin de que estan acusados y consignados al Juez competente, por no haberse vulnerado en las personas de los quejosos con estos procedimientos, las garantías que protegen los arts. 16, 19 y 35 (fracciones 1ª y 2ª) de la Constitucion general, 2º: no se impone multa á los solicitantes por su notoria insolvencia; 3º: hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado, sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé:—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Agosto 26 de 1874. *Luis G. Chavez*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas por los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landin Cecilio Hernandez y Guillermo Ruiz de Esparza, contra los actos de los CC. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro y Gefe político de la Capital del Estado de Zacatecas, por la prision de un mes impuesta á los dos últimos y la Orden de prision dictada contra los demás, importando estas providencias la infraccion de los artículos 16 y 19 y fracciones 1ª y 2ª del artículo 35 de la Constitucion federal; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propias legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo á los quejosos:

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca-

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 12 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Lic. Severo I. Reyes, en representacion de D. Francisco, D. Ramon y Doña Guadalupe Samaniego, contra los procedimientos del Juzgado 3º de Letras de la misma Capital, en las demandas presentadas por el C. Lic. Manuel Ambríz Moclesuma, apoderado de los Sres. Lagüera y Compañía, de aquel comercio.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: Que el Sr. Lic. D. Severo I. Reyes, mandatario de los Sres. D. Francisco, D. Ramon y D<sup>a</sup> María Guadalupe Samaniego, solicita amparo de la Justicia federal, en favor de sus representados, contra los actos del C. Juez 3º de 1ª instancia de la Capital, que con violacion de las garantías otorgadas por el art. 14 de la Constitucion general de la República, aplica las disposiciones del Código de procedimientos civiles, vigente en el Estado, al sus-

tanciar el juicio hipotecario que en su contra siguen los Sres. Lagüera y C<sup>a</sup>, siendo que el contrato que constituye aquella obligacion, fué celebrado con anterioridad á su vigencia en el mismo Estado.

Ese Juzgado, en vista de tal peticion, y calificando de urgente el caso, con fecha 13 del que rige tuvo á bien decretar la suspension de los actos reclamados, con fundamento de los arts. 3º y 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo en seguida el informe justificado que previene igualmente el art. 9º de la misma disposicion, el cual no fué rendido dentro del término legal, sino hasta las seis y media de la tarde del 20 del que rige.

Por las constancias que se han tenido á la vista del juicio, cuyos procedimientos se reclaman, el Ministerio ve que los hechos acusados han podido conciliarse de tal manera, al promoverse aquella accion hipotecaria por los vencimientos que los Sres. Lagüera y C<sup>a</sup> exigen de los meses de Agosto de 1872 y 1873, señalados en la escritura de 14 de Mayo de 1871, que no creó que se haya faltado á la aplicacion de la legislacion propia y conveniente en el caso, ni menos que absoluta y únicamente haya sido aplicada la del Código de procedimientos civiles, como asegura el actor.

Así, pues, la cuestion suscitada por el representante de los Sres. Samaniego, se hace consistir en que habiendo sido otorgada la escritura de hipoteca en Mayo de 1871, segun se ha expresado, el cumplimiento ó ejecucion de ella debe exigirse conforme la legislacion anterior y no á la que demarca aquel citado Código, y se hace necesario, por lo mismo, ver si en efecto por los procedimientos del C. Juez 3º de 1ª instancia de la Capital, se han violado ó no, en los mandantes del peticionario, las garantías del art. 14 de la Carta fundamental de la República, para deducir si en efecto cabe ó no el amparo solicitado.

Ante todo, el mismo Ministerio ve que se trata de un asunto judicial, que á mas de